



Asamblea General

Distr.
GENERAL

A/HRC/9/25
5 de septiembre de 2008

ESPAÑOL
Original: INGLÉS

CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS
Noveno período de sesiones
Tema 2 de la agenda

**INFORME ANUAL DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA LOS DERECHOS HUMANOS E INFORMES DE LA OFICINA DEL
ALTO COMISIONADO Y DEL SECRETARIO GENERAL**

**Estudio presentado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en
que se compilan las legislaciones y la jurisprudencia vigentes sobre
la difamación y el desprecio de las religiones***

Resumen

El presente estudio se ha preparado de conformidad con lo dispuesto en la resolución 7/19 del Consejo de Derechos Humanos. En él se compilan las legislaciones y la jurisprudencia pertinentes vigentes sobre la difamación y el desprecio de las religiones.

* Presentado con retraso.

ÍNDICE

	<i>Párrafos</i>	<i>Página</i>
INTRODUCCIÓN	1 - 5	3
I. ANTECEDENTES	6 - 10	4
II. NORMAS Y JURISPRUDENCIA INTERNACIONALES	11 - 32	5
III. INFORMES Y CONCLUSIONES DE LOS RELATORES ESPECIALES	33 - 45	9
IV. NORMAS Y JURISPRUDENCIA REGIONALES.....	46 - 72	12
V. LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA NACIONALES.....	73 - 79	17
VI. CONCLUSIONES.....	80 - 82	19

INTRODUCCIÓN

1. En su resolución 7/19, el Consejo de Derechos Humanos instó a los Estados "a que tomen medidas para prohibir la difusión, incluso por conducto de instituciones y organizaciones políticas, de ideas y documentación racistas y xenófobas que estén dirigidas contra cualquier religión o contra sus seguidores y que constituyan una incitación al odio, la hostilidad o la violencia raciales y religiosos".
2. En el párrafo 16 de la misma resolución, el Consejo de Derechos Humanos pidió a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos que le informara, en su noveno período de sesiones, "sobre la aplicación de la presente resolución y que le presente un estudio en que se compilen las legislaciones y la jurisprudencia pertinentes vigentes sobre la difamación y el desprecio de las religiones". Atendiendo a esa petición, la Alta Comisionada presenta al Consejo un informe sobre la aplicación de la resolución (A/HRC/9/7), así como el presente estudio.
3. Para preparar el informe y el estudio, el 24 de abril de 2008 la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) envió una nota verbal a los Estados miembros, las organizaciones regionales, las instituciones nacionales de derechos humanos y las organizaciones no gubernamentales (ONG) en que solicitaba información sobre la aplicación de la resolución y sobre las legislaciones y la jurisprudencia vigentes sobre la difamación y el desprecio de las religiones. El ACNUDH recibió contribuciones de nueve Estados miembros¹, una organización regional (el Consejo de Europa) y cinco ONG reconocidas como entidades consultivas por el Consejo Económico y Social; las contribuciones se resumen en el documento A/HRC/9/7. En la sección V del presente estudio se resumen las respuestas recibidas de los Estados miembros en lo relativo a las legislaciones y la jurisprudencia nacionales.
4. En el estudio se presentan conclusiones preliminares obtenidas de las investigaciones llevadas a cabo por el ACNUDH sobre las legislaciones y la jurisprudencia pertinentes en los planos internacional, regional y nacional, relativas a la difamación y el desprecio de las religiones. La información sobre las legislaciones y la jurisprudencia procede únicamente de las contestaciones recibidas.
5. En la sección II del estudio se resumen las disposiciones pertinentes de los instrumentos y la jurisprudencia internacionales relacionados con la libertad de religión, las restricciones permisibles de la libertad de expresión y de religión, y la incitación al odio y la violencia religiosa. La sección III versa sobre las conclusiones y recomendaciones formuladas por relatores especiales y antiguos titulares de mandatos; en la sección IV se reseñan normas y jurisprudencia regionales sobre la libertad de pensamiento, conciencia y religión, y sobre la libertad de expresión.

¹ Argentina, Bahrein, Chile, Costa Rica, Cuba, Egipto, Mauricio, Irán (República Islámica del) y Turquía.

I. ANTECEDENTES

6. La resolución 7/19 ha sido precedida por una serie de resoluciones sobre la difamación de las religiones aprobadas por la Asamblea General, la antigua Comisión de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos. La tónica común de estas resoluciones está compuesta de varios temas relacionados entre sí, en particular la descripción estereotipada y negativa de las religiones, sobre todo del islamismo; la vinculación del islamismo con la violencia y el terrorismo como consecuencia de los ataques terroristas de 2001 en los Estados Unidos de América; la difusión de ideas basadas en la superioridad; la existencia de leyes, políticas y prácticas discriminatorias lesivas para los grupos religiosos minoritarios; y a los actos de agresión contra las personas, las comunidades, sus bienes, y sus lugares y símbolos de culto.

7. Si bien en las resoluciones de que se trata se hace referencia a la "difamación de las religiones", es evidente que el término se emplea de forma genérica para describir algunos de los fenómenos antes señalados -en particular las declaraciones hostiles, la vinculación injustificada con actos de violencia, la estigmatización, el ridículo, los insultos contra la religión, la realización de ataques, la "islamofobia"- y no en un sentido estrictamente jurídico. A este respecto, en las resoluciones se menciona la difamación conjuntamente con la necesidad de luchar contra el odio, la discriminación, la intimidación, la coacción, etc. Por esta razón, en los párrafos 8 y 9 de la resolución 7/19 se insta a los Estados "a que tomen medidas para prohibir la difusión... de ideas y documentación racistas y xenófobas que estén dirigidas contra cualquier religión o contra sus seguidores" y se les pide que proporcionen "una protección adecuada contra los actos de odio, discriminación, intimidación y coacción resultantes de la difamación de cualquier religión".

8. En muchos ordenamientos jurídicos nacionales el concepto de difamación tiene por objeto proteger la reputación y la imagen de las personas. En su sentido jurídico general, denota una declaración inexacta (oral o escrita) publicada en diversos medios de comunicación (medio de prensa, audiovisuales o electrónicos) y que tiene por objeto perjudicar, o que perjudica la reputación de la persona. En algunas leyes nacionales, la formulación de la declaración debe incluir también un elemento de negligencia o mala fe. Por lo general, la pena por difamación es de índole civil, si bien en algunos países también se considera delito penal.

9. En algunos países hay leyes contra la blasfemia en que se prevén sanciones por actos de profanación (materiales, verbales, de prensa, audiovisuales, electrónicos, etc.). En otros se han promulgado leyes específicas contra la difamación de las religiones en que el concepto de difamación se amplía de manera de proteger las religiones y, en ese sentido, se considera que el concepto de difamación de religiones es fundamental para proteger la libertad de religión o de creencias.

10. En el marco de las normas internacionales de derechos humanos, la combinación de "difamación" y "religión" sigue siendo poco clara por diversas razones. El presente estudio se ha preparado precisamente dentro de ese marco, en relación con las siguientes cuestiones:

- a) Determinar la medida en que el concepto de difamación de las religiones puede originarse en el marco existente de normas internacionales de derechos humanos;

- b) Determinar el alcance de las normas internacionales de derechos humanos en materia de religión -es decir, la libertad de religión o de creencias, la discriminación basada en la religión y la incitación al odio y la violencia religiosos- y si dentro de esas normas se estudian debidamente los fenómenos a que se refieren las resoluciones;
- c) Determinar qué significa "difamación de las religiones" en el marco internacional de los derechos humanos, en particular en relación con la libertad de expresión y otros derechos humanos fundamentales.

II. NORMAS Y JURISPRUDENCIA INTERNACIONALES

11. Las cuestiones relativas a la religión se han tratado en varios instrumentos internacionales, entre ellos la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR), la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (ICERD), el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones.

12. Sin embargo, no hay ningún tratado específico sobre cuestiones relacionadas con la religión. Si bien ya en 1962 la Asamblea General en su resolución 1781 (XVII), pidió que se preparara un proyecto de declaración y un proyecto de convención sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia religiosa, la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones sólo vino a aprobarse en 1981. Ello demuestra la complejidad del tema y la falta de consenso sobre algunas cuestiones fundamentales.

13. Desde un punto de vista técnico, la Declaración no es un instrumento vinculante, pero es considerada la elaboración más amplia de las normas pertinentes contenidas en el ICCPR y en la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Declaración versa sobre dos temas generales: la libertad religiosa y la protección contra la discriminación. No hay en ella ninguna disposición relativa a la incitación al odio y la violencia religiosos, si bien la cuestión figura en el párrafo 2 del artículo 20 del ICCPR.

Libertad de religión o de creencias

14. Desde la fundación de las Naciones Unidas, la libertad de religión o de creencias ha venido concitando suma atención. La Carta de las Naciones Unidas no menciona expresamente la libertad de religión o de creencias, pero sus disposiciones en materia de derechos humanos constituyen un marco normativo al respecto². Posteriormente se han aprobado muchas resoluciones, así como los tratados básicos de derechos humanos, que se refieren directa e indirectamente a la libertad de religión o de creencias.

² Entre los propósitos de la Organización, establecidos en el Artículo 1 de la Carta, se cuenta desarrollar y estimular el "respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos sin hacer distinción por motivos de... religión". Los Artículos 13, 55 y 56 se refieren también a los derechos humanos.

15. En el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos se esbozan los parámetros de la libertad de religión o de creencias. En él se indica que "toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia".

16. En el artículo 18 del ICCPR se dispone lo siguiente: "1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza. 2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección. 3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás". En el artículo 1 de la Declaración se utiliza un lenguaje análogo.

17. En su artículo 5, la ICERD dispone que "los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de... vii) el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión".

18. Las tres dimensiones de la libertad de religión o de creencias expuestas en estos instrumentos son la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. En su Observación general N° 22 (1993), relativa al artículo 18, el Comité de Derechos Humanos señala que la libertad de pensamiento y la libertad de conciencia se protegen de igual modo que la libertad de religión y de creencias. El carácter fundamental de estas libertades se refleja también en el hecho de que, como se declara en el párrafo 2 del artículo 4 del ICCPR, esta disposición no puede ser objeto de suspensión, ni aun en situaciones excepcionales.

19. Además del derecho de toda persona a la libertad de religión o de creencias, el ICCPR, en su artículo 27, estipula que no se negará a las personas que pertenezcan a minorías étnicas, religiosas o lingüísticas "el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma". En su Observación general N° 22, el Comité de Derechos Humanos señala que la prohibición de toda apología del odio religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia, en el párrafo 2 del artículo 20, es una importante garantía frente a las violaciones de los derechos de las minorías religiosas y de otros grupos religiosos a ejercer los derechos garantizados por los artículos 18 y 27, y frente a los actos de violencia o persecución dirigidos contra esos grupos.

Relación de la libertad de religión con la libertad de expresión y otros derechos y libertades humanos fundamentales

20. En el párrafo 12 de la resolución 7/19 del Consejo de Derechos Humanos se indica que la libertad de expresión no es ilimitada. De hecho, en el ICCPR se prevén ciertas restricciones a la libertad de expresión, en particular en el párrafo 3 del artículo 19, en cuanto que pueden

imponerse ciertas restricciones a la libertad de expresión para proteger los derechos o la reputación de otros, la seguridad nacional, el orden público y la salud o la moral públicas. Sin embargo, en su Observación general N° 10 (1983), relativa a la libertad de opinión, el Comité de Derechos Humanos subrayó que las restricciones no debían poner en peligro ese derecho en sí mismo. Las restricciones debían estar "fijadas por la ley", imponerse únicamente aduciendo una de las razones establecidas en los apartados a) y b) del artículo, y justificarse como "necesarias" para alcanzar uno de esos propósitos.

21. En *Malcolm Ross c. el Canadá* (2000), el Comité de Derechos Humanos dictaminó que el despido de un educador de su puesto docente debido a las declaraciones antisemitas que había publicado en un período en que cumplía funciones de profesor constituía una restricción prevista en la cláusula de limitación que figuraba en el párrafo 3 del artículo 19, porque no infringía el derecho a la libertad de expresión del autor.

22. En *Robert Faurisson c. Francia* (1996), el Comité de Derechos Humanos dictaminó que la restricción de la libertad de expresión del autor y su enjuiciamiento con arreglo a la Ley Gayssot de 1990, de Francia, según la cual constituía delito cuestionar la existencia de determinados crímenes de lesa humanidad con arreglo a los cuales el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg había declarado culpables a líderes nazis en 1946, eran permisibles y necesarios en virtud del apartado a) del párrafo 3 del artículo 19 del Pacto.

Incitación al odio y la violencia religiosos

23. En 2006, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó un informe al Consejo de Derechos Humanos sobre la incitación al odio racial y religioso y la promoción de la tolerancia en que se describía detalladamente el marco jurídico internacional que abarcaba el odio racial y religioso (A/HRC/2/6). La conclusión del informe era que los instrumentos internacionales y regionales sobre derechos humanos vigentes, en particular el ICCPR, la ICERD y los tres instrumentos regionales, ofrecían una excelente base sobre la cual era posible "fundar respuestas jurídicas y de política al problema de la intolerancia más generalmente y de la incitación al odio y la violencia en particular" (párr. 80).

24. En el informe se señalaba, sin embargo, que la aplicación de las normas pertinentes constituía un reto, en parte debido a la falta de claridad de algunos conceptos clave de la ley, tales como la incitación, el odio y la apología del odio. Por ello era esencial seguir reflexionando sobre el alcance de las medidas que un Estado podía tomar legítimamente para poner coto a las apologías del odio y determinar formas de robustecer la aplicación. El informe llegaba a la conclusión de que "la aplicación uniforme y sistemática de la ley es fundamental para garantizar la eficacia de los esfuerzos internacionales desplegados a fin de contrarrestar la intolerancia" (párr. 84).

25. Como se señala en el informe de la Alta Comisionada, en el párrafo 2 del artículo 20 del ICCPR se prohíbe expresamente la apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia. En esa disposición no se establece un derecho sino una restricción de otros derechos, en particular, la libertad de expresión y la libertad de manifestar religiones o creencias. Durante los trabajos preparatorios del Pacto, se expresó el temor de que se abusara de la prohibición de la apología y que esa disposición repercutiera negativamente en el derecho a la libertad de expresión (A/2929, párr. 190).

26. En 1983, el Comité de Derechos Humanos aprobó la Observación general N° 11, relativa a la prohibición de la propaganda en favor de la guerra y de la incitación al odio nacional, racial y religioso (art. 20), en que expresó la opinión de que "estas prohibiciones, necesarias, son plenamente compatibles con el derecho a la libertad de expresión enunciado en el artículo 19, cuyo ejercicio implica deberes y responsabilidades especiales". Observó, asimismo, que el párrafo 2 del artículo 20 estaba "dirigido contra toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia, tanto si tal propaganda o apología tiene fines internos al Estado de que se trate como si tiene fines externos a ese Estado".

27. El Comité destacó también que, para que el artículo 20 llegara a ser plenamente eficaz "debería existir una ley en la que se dejase bien sentado que la propaganda y la apología en él descritas son contrarias a la política del Estado y en la que se estableciese una sanción adecuada en caso de incumplimiento". Además, en su Observación general N° 22 (1993), el Comité de Derechos Humanos declaró que "según el artículo 20, ninguna manifestación de carácter religioso o de creencias puede equivaler a la propaganda en favor de la guerra o la apología del odio nacional, racial o religioso, que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia".

28. En lo que se refiere a la apología del odio, en el artículo 4 de la ICERD se estipula que "los Estados partes condenan toda la propaganda y todas las organizaciones que se inspiren en ideas o teorías basadas en la superioridad de una raza o de un grupo de personas de un determinado color u origen étnico, o que pretendan justificar o promover el odio racial y la discriminación racial, cualquiera que sea su forma, y se comprometen a tomar medidas inmediatas y positivas destinadas a eliminar toda incitación a tal discriminación o actos de tal discriminación... teniendo debidamente en cuenta los principios incorporados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como los derechos expresamente enunciados en el artículo 5 de la presente Convención".

29. En el apartado c) de su artículo III, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948, entre los actos punibles incluye "la instigación directa y pública a cometer genocidio". Esta disposición figura también en el apartado c) del párrafo 3 del artículo 4 del Estatuto del Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de las violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia, en el apartado c) del artículo 3 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Rwanda y en el apartado e) del párrafo 3 del artículo 25 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Convergencia de los conceptos de raza y religión

30. Las restricciones permisibles de la libertad de expresión constituyen una de las cuestiones más importantes de los estudios sobre la difamación de las religiones. En el párrafo 13 de la resolución 7/19 se menciona la Recomendación general N° XV del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, en que se afirma que "la prohibición de la difusión de todas las ideas basadas en la superioridad o el odio racial es compatible con el derecho a la libertad de opinión y de expresión" (párr. 4). En la resolución se asevera que la prohibición es igualmente aplicable a la cuestión de la incitación al odio religioso.

31. Si bien ha sostenido que la discriminación basada exclusivamente en razones religiosas no está comprendida expresamente en el ámbito de la Convención³, en numerosas ocasiones el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial se ha referido a la doble discriminación por motivos de raza y religión y ha hecho hincapié en la "interrelación" de la discriminación racial y la discriminación religiosa⁴, ha recomendado que se prohíba la discriminación religiosa, incluida la dirigida a las minorías religiosas inmigrantes⁵ y ha recordado a los Estados que deben velar "por que todas las personas disfruten de los derechos de libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, ascendencia y origen nacional o étnico, de conformidad con el apartado d) del artículo 5 de la Convención"⁶.

32. El Comité expresó también preocupación acerca de presuntos casos de "islamofobia" como consecuencia de los ataques del 11 de septiembre y recomendó que los Estados estudiaran cuanto antes la posibilidad de hacer extensiva la tipificación del delito de incitación al odio racial, a los delitos motivados por odio religioso contra comunidades inmigrantes⁷. De la misma forma, recomendó que en los juicios penales el motivo de odio religioso, conjuntamente con el odio racial o étnico, se considerara una circunstancia agravante⁸.

III. INFORMES Y CONCLUSIONES DE LOS RELATORES ESPECIALES

33. Los informes y estudios preparados en virtud de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos y, anteriormente, de la Comisión de Derechos Humanos, permiten apreciar mejor la dimensión normativa y operacional de la difamación de las religiones. En el marco de sus mandatos, mediante visitas sobre el terreno, diálogos con gobiernos, estudios e informes periódicos, los procedimientos especiales pueden contribuir a la formulación y esclarecimiento de principios, así como a la fijación de normas. En particular, en 1986 la Comisión de Derechos Humanos estableció el mandato del Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias para que su titular siguiera de cerca la aplicación de la Declaración y recomendara medidas correctivas, según procediese. Conjuntamente con el Relator Especial

³ *P.S.N. v. Denmark, A.W.R.A.P. v. Denmark* (CERD/C/71/D/36/2006, párr. 6.3) en relación con los trabajos preparatorios de la Convención, conforme a lo cual la Tercera Comisión de la Asamblea General había rechazado la propuesta de incluir la discriminación racial y la intolerancia religiosa en un solo instrumento.

⁴ CERD/C/63/CO/11, párr. 20 (10 de diciembre de 2003); CERD/C/63/CO/6, párr. 14 (10 de diciembre de 2003); CERD/C/NGA/CO/18, párr. 20 (1º de noviembre de 2005); CERD/C/TZA/CO/16, párr. 20 (1º de noviembre de 2005); CERD/C/IRL/CO/2, párr. 18 (14 de abril de 2005); CERD/C/RUS/CO/19, párrs. 16 y 17 (20 de agosto de 2008).

⁵ CERD/C/63/CO/11, párr. 20 (10 de diciembre de 2003).

⁶ CERD/C/63/CO/6, párr. 14 (10 de diciembre de 2003).

⁷ CERD/C/63/CO/11, párr. 21 (10 de diciembre de 2003).

⁸ CERD/C/DEU/CO/18, párr. 26 (21 de agosto de 2008).

sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, la Relatora Especial sobre la libertad de religión o de creencias ha hecho contribuciones importantes a las cuestiones de que se trata, entre ellas respecto del estado de la libertad de religión, la tolerancia y el alcance de la responsabilidad de los Estados.

34. El ex Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia presentó una serie de informes a la Comisión de Derechos Humanos y al Consejo de Derechos Humanos sobre la cuestión de la "difamación de las religiones". En 2004, por ejemplo, presentó un informe a la Comisión de Derechos Humanos, en su 61º período de sesiones, en que se refirió al antisemitismo, la cristianofobia y la islamofobia como formas de discriminación⁹.

35. En 2006, el Relator Especial sobre el racismo y la Relatora Especial sobre la libertad de religión o de creencias presentaron un informe conjunto al Consejo de Derechos Humanos, en su segundo período de sesiones, en que observaron que había una estrecha vinculación entre la difamación de las religiones y el derecho a la libertad de expresión, la discriminación y la intolerancia (A/HRC/2/3, párrs. 8 y 17).

36. Los Relatores Especiales señalaron también que "las normas internacionales de derechos humanos protegen primordialmente al individuo en el ejercicio de su libertad de religión, y no la religión en sí" (párr. 27), haciendo notar que "el derecho a la libertad de religión o de creencias, consagrado en las normas jurídicas internacionales pertinentes, no incluye el derecho a tener una religión o unas creencias que no puedan criticarse ni ridiculizarse" y que "la difamación de religiones puede ofender a las personas y herir sus sentimientos religiosos, pero no entraña necesariamente, o por lo menos de forma directa, una violación de sus derechos, en particular de su derecho a la libertad de religión" (párrs. 36 y 37).

37. En el informe se hace hincapié además que tipificar como delito la difamación de la religión puede ser contraproducente ya que "la protección estricta de las religiones puede crear, de por sí, una atmósfera de intolerancia y de temor, y puede incluso dar lugar a una reacción violenta" (párr. 42). Los Relatores Especiales recomendaron al Comité de Derechos Humanos que considerara la posibilidad de adoptar normas complementarias sobre la interrelación entre la libertad de expresión, la libertad de religión y la no discriminación, en particular redactando una observación general sobre el artículo 20 del ICCPR.

38. En el informe que presentó el Consejo de Derechos Humanos en su sexto período de sesiones (A/HRC/6/6), el Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial y xenofobia y formas conexas de intolerancia hizo hincapié en que "la lucha contra la discriminación religiosa en general requiere un enfoque categórico centrado en la prevención de las consecuencias directas e indirectas de la difamación de religiones, incluido su papel en el discurso que legitima el racismo y la discriminación" (párr. 13).

39. El 22 de abril de 2008, en el primer período sustantivo del Comité Preparatorio para la Conferencia de Examen de Durban, el Relator Especial sugirió, entre otras cosas, que sobre la base de su experiencia en la presentación de informes sobre la difamación de religiones, el fondo

⁹ E/CN.47/2005/18/Add.4, párrs. 13, 15, 40 y 48.

del debate sobre el racismo y la religión se reorientara de la difamación de las religiones a la incitación al odio racial y religioso. A su juicio, si bien la difamación de las religiones era un concepto sociológico, la incitación al odio racial y religioso era un concepto jurídico que podía estudiarse con arreglo a instrumentos internacionales; en el marco de los derechos humanos, la incitación al odio racial y religioso estaba prohibido por el ICCPR, la ICERD y la Declaración y Programa de Acción de Durban, así como por muchas constituciones nacionales.

40. En el informe sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia religiosa que presentó a la Asamblea General en su sexagésimo segundo período de sesiones, la Relatora Especial sobre la libertad de religión o de creencias subrayó que diversas leyes nacionales que prohibían la blasfemia protegían sólo la religión dominante en el Estado de que se trataba o se aplicaban de forma discriminatoria y para reprimir a las minorías, a los miembros de otras confesiones religiosas, a los ateos y a los no teístas (A/62/280, párr. 70). Indicó que una alternativa útil a las leyes sobre la blasfemia podría ser proteger plenamente a las personas de toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyera incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (párr. 76). La Relatora Especial señaló también que en vista del ingente número de religiones y creencias, podían surgir entre los creyentes diferencias de opinión auténticas y que "sería difícil y podría ser peligroso definir en abstracto lo que constituye una simple difamación de la religión, y no sería fácil encontrar un órgano imparcial, independiente y no arbitrario que decidiera sobre esos casos" (párr. 77).

41. En el informe que presentó sobre la visita a un país (E/CN.4/2006/5/Add.2), la Relatora Especial afirmó que el Estado tenía la obligación de garantizar que se hiciera justicia con rapidez y de la forma debida, subrayando que "no podía lograrse una solución duradera si no se hacía justicia tanto para los perpetradores como para las víctimas de todos los actos de violencia por razones religiosas ya ocurridos. La existencia de un clima de impunidad sólo puede alentar a los que planean fomentar nuevos actos de violencia" (párr. 95). El Estado tiene la obligación de "garantizar la protección y la seguridad de los grupos religiosos que pueden ser objeto de ataques y que deben tener derecho a practicar su religión libremente y sin obstáculos, incluidas las religiones creadas por agentes no estatales" (párr. 113).

42. En su primera declaración conjunta, dada a conocer en 1999, el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, el Representante de la OSCE para la Libertad de los Medios de Comunicación y el Relator Especial de la OEA para la Libertad de Expresión señalaron que en muchos países existían leyes, como las leyes de desacato, que limitaban indebidamente el derecho a la libertad de expresión. Instaron a los Estados a revisar esas leyes para adecuarlas a sus obligaciones internacionales¹⁰.

43. En la declaración conjunta que formularon en 2000, hicieron notar que el abuso de las leyes restrictivas sobre difamación e injuria mediante publicaciones habían "alcanzado proporciones críticas en muchas partes del mundo"¹¹. Recomendaron pautas mínimas para la legislación sobre difamación, entre ellas las siguientes: a) derogar las leyes penales sobre

¹⁰ <http://www.cidh.org/Relatoria/showarticle.asp?artID=141&IID=1>.

¹¹ <http://www.cidh.org/Relatoria/showarticle.asp?artID=142&IID=1>.

difamación y adoptar en su lugar leyes civiles, conforme a las pautas internacionales pertinentes; b) nadie debe estar expuesto a acciones enmarcadas en la legislación sobre difamación por expresar opiniones; y c) las sanciones civiles por difamación no deben ser de tales proporciones que susciten un efecto inhibitorio sobre la libertad de expresión y deben estar diseñadas de modo de restablecer la reputación dañada y no de indemnizar al demandante o castigar al demandado.

44. En la declaración conjunta de 2000 se respaldó también el documento de ARTICLE 19 "Definición de difamación: principios sobre libertad de expresión y protección de la reputación" en cuyo principio 2, relativo a los propósitos legítimos de las leyes de difamación, se señala que dichas leyes no pueden justificarse si su propósito o efecto es proteger la "reputación" de entidades tales como el Estado, la nación, símbolos religiosos, banderas o distintivos nacionales, o resguardar el orden público, la seguridad nacional o las relaciones de amistad con Estados o gobiernos extranjeros¹². En 2002 los tres titulares de mandatos dieron a conocer otra declaración conjunta, en que reiteraron que la difamación penal no era una restricción justificable de la libertad de expresión y que todas las leyes penales sobre difamación deberían ser abolidas y sustituidas, en caso necesario, por leyes civiles apropiadas sobre la materia¹³.

45. El 19 de diciembre de 2006, el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, el Representante de la OSCE para la Libertad de los Medios de Comunicación, el Relator Especial de la OEA para la Libertad de Expresión y el Relator Especial de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre la libertad de expresión aprobaron una declaración sobre diversas cuestiones, incluida la libertad de expresión y las tensiones culturales y religiosas. En la declaración se indicaba que los gobiernos debían abstenerse de introducir leyes en virtud de las cuales constituyera delito sencillamente exacerbar las tensiones sociales. Se añadía que, si bien era legítimo sancionar toda apología que constituyera incitación al odio, no era legítimo prohibir toda expresión que constituyera una ofensa. En la declaración se recordaba también que en la mayoría de los países ya había leyes excesivas, o por lo menos suficientes, contra las expresiones de odio¹⁴.

IV. NORMAS Y JURISPRUDENCIA REGIONALES

46. Los principales sistemas regionales de derechos humanos contienen normas y jurisprudencia extensas sobre la libertad de culto, las restricciones aceptables y la difamación de religiones que revelan muchas similitudes pero también diferencias importantes.

¹² Article 19, Defining Defamation: Principles on Freedom of Expression and Protection of Reputation, julio de 2000.

¹³ <http://www.cidh.org/Relatoria/showarticle.asp?artID=87&IID=1>.

¹⁴ Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2006, vol. II, Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, OEA/Ser.L/V/II.127 Doc.4, 3 de marzo de 2007, pág. 109.

El sistema africano regional de derechos humanos

47. El artículo 8 de la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos garantiza la libertad de conciencia y profesión, y la libre práctica de la religión, y dice que "nadie que respete la ley y el orden puede ser sometido a medidas que restrinjan el derecho de esas libertades". Con respecto a la libertad de expresión, el artículo 9 de la Carta estipula que "todo individuo tendrá derecho a expresar y difundir sus opiniones, siempre que respete la ley".

48. Con respecto al ámbito permisible de las restricciones sobre la libertad de expresión, la Declaración de principios sobre la libertad de expresión en África¹⁵ dispone en el Principio II (Limitaciones de la libertad de expresión) que "toda restricción a la libertad de expresión deberá ser impuesta por ley, perseguir un objetivo legítimo y ser necesaria en una sociedad democrática". En el Principio XIII (Medidas penales) se establece que "la libertad de expresión no podrá ser limitada por razones de orden público ni de seguridad nacional, a menos que exista un riesgo real de amenaza inminente a un interés legítimo y un vínculo causal directo entre la amenaza y la expresión".

49. En 2006, en su 40º período ordinario de sesiones, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos aprobó una resolución sobre la situación de la libertad de expresión en África en que se hacía hincapié en la libertad de expresión como libertad garantizada en el artículo 9 de la Carta Africana y en los artículos 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos respectivamente, y en otros tratados, resoluciones, instrumentos internacionales y constituciones nacionales.

El sistema europeo

50. El artículo 9 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales garantiza el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión y dispone que "la libertad de manifestar su religión o sus convicciones no puede ser objeto de más restricciones que las que, previstas por la ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad pública, la protección del orden, de la salud o de la moral públicas, o la protección de los derechos o las libertades de los demás".

51. El artículo 10 del Convenio protege el derecho a la libertad de expresión y dispone que el ejercicio de esas libertades "podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones, previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial".

52. La libertad de expresión, garantizada en el artículo 10 del Convenio, es aplicable no sólo a la "información" o las "ideas" que son favorablemente recibidas o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también a todas aquellas que ofenden, escandalizan o perturban al Estado o a

¹⁵ Resolución 62(XXXII)02: Resolución sobre la aprobación de la Declaración de principios sobre la libertad de expresión en África (2002).

cualquier sector de la población. Al mismo tiempo, el ejercicio de la libertad de expresión también entraña obligaciones y responsabilidades.

Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

53. En varias decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se señala que la limitación de la libertad de expresión en el marco del artículo 10 del Convenio se aplica a las expresiones que no solamente critican, se oponen o niegan las creencias religiosas, sino también que obstaculizan el ejercicio de la libertad de religión de los que tienen esas creencias.

54. Con arreglo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la prueba para determinar si las restricciones de la libertad de expresión son "necesarias en una sociedad democrática" es si corresponden a una "necesidad social apremiante", están proporcionadas al objetivo que se persigue (los posibles efectos del medio de expresión de que se trate son un factor importante para determinar la proporcionalidad de una limitación), y si las razones que justifican la limitación son pertinentes y suficientes.

55. Con respecto a la "necesidad" de restricciones de la libertad de expresión y las medidas que deben adoptarse a ese respecto, el Tribunal ha determinado que las autoridades nacionales tienen un cierto margen discrecional, que no es ilimitado pero que está sujeto a la supervisión del Tribunal, cuya tarea es dar un fallo final respecto de si la restricción se puede conciliar con la libertad de expresión protegida por el artículo 10.

56. En el caso *Instituto Otto Preminger c. Austria* (1994), el Tribunal Europeo de Derechos Humanos observó que quienes optan por ejercer la libertad de manifestar su religión, independientemente de que lo hagan como miembros de una mayoría o una minoría religiosa, no pueden razonablemente esperar estar exentos de toda crítica. Deben tolerar y aceptar que otros rechacen sus creencias religiosas e incluso que difundan doctrinas hostiles a su fe. Sin embargo, la manera en que se oponen o niegan las creencias y doctrinas religiosas es cuestión que puede ser parte de la responsabilidad del Estado, en particular su responsabilidad de asegurar el disfrute pacífico del derecho garantizado en el artículo 9 a quienes profesan esas creencias y doctrinas (párr. 47).

57. El Tribunal Europeo dijo que, al disponer la confiscación de la película, las autoridades austríacas actuaron con miras a proteger la paz religiosa en la región y evitar que algunas personas pudieran sentirse objeto de ataques a sus creencias religiosas de manera injustificada y ofensiva (párr. 56). El Tribunal también afirmó que representar objetos de veneración religiosa de forma que pudiera constituir una provocación, "puede considerarse una violación maliciosa del espíritu de tolerancia, que ha de ser rasgo característico de una sociedad democrática". El Tribunal señaló que en el contexto de las opiniones y creencias religiosas, los que ejercen el derecho a la libertad de expresión con arreglo al artículo 10 del Convenio tienen la obligación de "evitar en la medida de lo posible expresiones que sean gratuitamente ofensivas a otros" (párrs. 47 y 49).

58. En *Wingrove c. el Reino Unido* (1996), el Tribunal Europeo observó que la ley sobre la blasfemia no trataba en pie de igualdad a las diferentes religiones practicadas en el Reino Unido (solamente protege a la religión cristiana y, más específicamente, a la iglesia oficial de Inglaterra), pero dijo que esa no era la cuestión sobre la que el Tribunal tenía que pronunciarse. El Tribunal defendió la denegación del certificado de distribución a una película porque dicha

denegación tenía como objeto legítimo proteger "los derechos de los demás", y, más concretamente, proteger de ataques muy ofensivos a cuestiones consideradas sagradas por los cristianos.

59. En *Í.A. c. Turquía* (2005), el Tribunal Europeo destacó que el pluralismo, la tolerancia y la amplitud de criterio son características de una sociedad democrática y señaló que la libertad de expresión se aplicaba no sólo a la "información" o las "ideas" que son recibidas favorablemente y se consideran inofensivas o indiferentes, sino también a las que ofenden, escandalizan o perturban. No obstante, también observó que, en relación con las creencias religiosas, puede haber una obligación legítima de evitar expresiones que sean gratuitamente ofensivas y profanas para los demás, por lo que puede considerarse necesario castigar ataques indebidos contra objetos de veneración religiosa.

60. El Tribunal Europeo observó que los fallos de los órganos nacionales apuntaban a proporcionar protección contra ataques ofensivos en cuestiones que los musulmanes consideraban sagradas, y que tales medidas puede considerarse razonablemente que han satisfecho una "necesidad social apremiante". El Tribunal decidió que no había habido violación del artículo 10 del Convenio.

61. En *Aydın Tatlav c. Turquía* (2006), en cambio, el Tribunal Europeo dictaminó que había habido una violación del artículo 10 por el Estado. Dijo que una condena penal con posibilidades de pena privativa de la libertad puede tener el efecto de desalentar a autores y directores de publicaciones de publicar opiniones no conformistas acerca de la religión y, por consiguiente, obstaculizar el pluralismo indispensable para el buen funcionamiento de una sociedad democrática.

62. En *Giniewski c. Francia* (2006), el Tribunal Europeo dijo que aunque el artículo del demandante criticaba una encíclica papal y, por lo tanto, la posición del Papa, el análisis que contenía no podía extenderse a todo el cristianismo. El Tribunal falló nuevamente diciendo que no se justificaban restricciones a la libertad en el marco del artículo 10 del Convenio Europeo porque la publicación del caso no era "gratuitamente ofensiva" ni insultante, no incitaba a la irreverencia ni al odio, no arrojaba dudas de ningún tipo sobre hechos históricos claramente establecidos y no satisfacía el imperativo de la "necesidad social apremiante".

63. El Tribunal Europeo adoptó la misma posición en *Klein c. Eslovaquia* (2007) y dictaminó que se había producido una violación del artículo 10 del Convenio Europeo porque la sanción no era necesaria, no respondía a ninguna necesidad social apremiante y no estaba proporcionada al objetivo legítimo que se perseguía.

64. En resumen, según el Tribunal Europeo, quienes optan por ejercer la libertad de manifestar su religión deben tolerar y aceptar que otros nieguen sus creencias religiosas e incluso que otros propaguen doctrinas hostiles a su fe (*Instituto Otto Preminger c. Austria*). Sin embargo, en los casos del Tribunal Europeo se individualiza el siguiente factor entre los demás que han de tenerse en cuenta para determinar el margen permisible de limitaciones sobre declaraciones e incitación al odio: las descripciones de objetos de veneración religiosa que constituyen una provocación "pueden considerarse una violación maliciosa del espíritu de tolerancia, que ha de ser rasgo característico de una sociedad democrática", como lo afirmó en su fallo en *Instituto Otto Preminger c. Austria*; es objetivo legítimo de un Estado en el marco del Convenio "proteger

los derechos de los demás" y, más particularmente, proporcionar protección contra ataques ofensivos graves o gratuitos en cuestiones que un segmento de la población considere sagradas, ya sean cristianos (*Wingrove c. el Reino Unido*) o musulmanes (*I.A. c. Turquía*); las medidas que se adopten para proteger de ataques ofensivos deben estar proporcionadas al objetivo legítimo que se persigue y satisfacer el criterio de "necesidad social apremiante" (*I.A. c. Turquía*, *Wingrove c. el Reino Unido*); las limitaciones de la libertad de expresión no deben tener como efecto desalentar a escritores y directores de publicaciones de publicar opiniones no conformistas sobre la religión, y no deben obstaculizar la protección del pluralismo (*Aydın Tatlav c. Turquía*).

El sistema interamericano

65. Tres de los principales instrumentos de derechos humanos del sistema interamericano tienen disposiciones análogas en relación con la libertad de religión: la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) y la Declaración Interamericana sobre la Libertad de Expresión. En el artículo III de la Declaración Americana se dispone que "toda persona tiene el derecho de profesar libremente una creencia religiosa y de manifestarla y practicarla en público y en privado". El artículo IV estipula que "toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio".

66. El artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice que "toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado". También dice que "nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o creencias" y que "la libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás".

67. El artículo 13 de la Convención garantiza el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, que abarca "la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección". El ejercicio de ese derecho "no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: 1) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o 2) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas". Además, no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos.

68. La única excepción a la prohibición de la censura previa figura en el párrafo 4 del artículo 13, que dispone que "los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia". En el párrafo 5 del mismo artículo se afirma que "estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional".

69. La Declaración Interamericana de Principios sobre Libertad de Expresión, aprobada en 2000, se extiende sobre las limitaciones enunciadas en el artículo 13 de la Convención. El principio 5 dice que "la censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley". En el artículo 7 se dispone además que los "condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales".

Corte Interamericana de Derechos Humanos

70. La Corte Interamericana ha reiterado la prohibición de la censura previa. En *Olmedo Bustos y otros c. Chile "La última tentación de Cristo"* (2001), la Corte declaró que Chile había violado el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos al prohibir la exhibición de la película.

71. La Corte observó que la libertad de expresión no se limitaba al derecho a la expresión oral o escrita, sino que también estaba estrechamente vinculado al uso de cualquier método apropiado de difundir pensamientos y permitir llegar a mayor número de personas. La Corte dijo que la excepción a la censura previa enunciada en el párrafo 4 del artículo 13 de la Convención Interamericana tiene por objeto regular el acceso para la protección moral de niños o adolescentes y se limita a los espectáculos públicos. La limitación de la libertad de pensamiento y expresión en todos los demás casos no guarda conformidad con la Convención.

72. Con respecto al derecho a la libertad de conciencia y de religión, la Corte dijo que la negativa de las autoridades a que la película se exhibiera no menoscababa ni privaba a nadie de su derecho a mantener, cambiar, profesar o difundir su religión o sus creencias con total libertad.

V. LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA NACIONALES

73. La Constitución de la Argentina, en su artículo 14, estipula que "todos los habitantes de la Nación gozan del derecho a difundir sus ideas mediante la prensa sin censura previa y a profesar libremente su religión". El artículo 19 de la Constitución determina que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan el orden ni la moral pública ni perjudiquen a un tercero están sólo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados; ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe. Además, en el artículo 20 se establece que los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano, entre los que cabe mencionar el de ejercer libremente su culto.

74. La Constitución de Chile garantiza la libertad de conciencia, la manifestación de todos los credos y el libre ejercicio de todos los cultos que no se opongan a la moral, las buenas costumbres o el orden público. Además, la Ley de cultos chilena (Nº 19638, de octubre de 1999) establece las normas que, de conformidad con las disposiciones constitucionales, se aplican a las iglesias y las organizaciones religiosas. Instituye la igualdad jurídica de las entidades religiosas.

75. La Constitución de Costa Rica establece, en el artículo 75, que la religión católica apostólica romana es la del Estado, sin impedir el libre ejercicio de otros cultos que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres. El artículo 28 de la Constitución estipula que nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley; las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público, o que no perjudiquen a terceros, están fuera de la acción de la ley. Sin embargo, ni clérigos ni seglares podrán hacer en forma alguna propaganda política invocando motivos de religión o valiéndose como medio de creencias religiosas.

76. La Constitución de Cuba, en su artículo 42, prohíbe la discriminación por motivo de raza, color de la piel, sexo, origen nacional, creencias religiosas y cualquiera otra lesiva a la dignidad humana. Además, en el artículo 55 se establece que el Estado reconoce, respeta y garantiza la libertad de conciencia y de religión, reconoce, respeta y garantiza la libertad de cada ciudadano de cambiar de creencias religiosas o no tener ninguna, y de profesar, dentro del respeto a la ley, el culto religioso de su preferencia. El artículo 294 del Código Penal de Cuba sanciona con privación de libertad de hasta dos años el delito contra la libertad de culto, cuando el que lo comete es un funcionario público.

77. La Constitución de Egipto establece en el artículo 40 que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y tienen iguales derechos y obligaciones públicos sin discriminación por motivos de raza, origen étnico, idioma, religión o credo. La Constitución también estipula que el Estado garantizará la libertad de creencias y la libertad de la práctica de ritos religiosos. Con respecto al derecho penal, en el artículo 160 del Código Penal de Egipto se disponen sanciones para el uso de violencias o amenazas de perturbar o interrumpir los ritos o celebraciones de cualquier comunidad; la destrucción, los daños o la profanación de locales dedicados a la práctica de ritos religiosos o de símbolos u otros artículos venerados por los miembros de una comunidad o un grupo religioso, y la violación o profanación de tumbas o cementerios. Además, en el artículo 161 se prevén penas por imprimir o publicar versiones distorsionadas del libro sagrado de cualquier religión que se practique públicamente, siempre que el texto haya sido intencionalmente alterado de manera de cambiar su significado, y por imitar un rito religioso en un lugar público con miras a ridiculizarlo o a presentarlo como espectáculo.

78. La Constitución de Mauricio, en el artículo 11, titulado "Protección de la libertad de conciencia", dice que, salvo con su propio consentimiento, no se impedirá a ninguna persona el disfrute de su libertad de conciencia, la cual incluye la libertad de pensamiento y religión, libertad para cambiar de religión o creencias y libertad, por sí solo o con otros, en público o en privado, de manifestar y difundir su religión o creencia mediante ritos, enseñanza, práctica y observancia. El Código Penal de Mauricio contiene varias disposiciones relativas a la libertad de conciencia, entre las que cabe mencionar el artículo 206, relativo a las ofensas a la moralidad pública y religiosa, y el artículo 208, relativo a las penas aplicables a los autores de ofensas a la religión.

79. El artículo 125 del Código Penal de Turquía castiga a cualquier persona que atribuya a otra persona un acto de manera de menoscabar el honor, la dignidad o prestigio de esa persona. Los apartados b) y c) del párrafo 3 de ese artículo prevén penas para los insultos cometidos al declarar, alterar o difundir las creencias religiosas, políticas, sociales o filosóficas, los pensamientos o las convicciones de una persona, de conformidad con los mandamientos o prohibiciones de una religión a la que pertenezca esa persona, cuando el tema se considere

sagrado en la religión a la que pertenece esa persona. El Código Penal de Turquía también sanciona a las personas que dañen los solares, los edificios y las estructuras conexas de un lugar de culto o los bienes muebles que se encuentre en ese lugar (art. 153, párrs. 1 y 2). Además, prevé penas para las personas que inciten públicamente al odio o la hostilidad de un sector de la población contra otro sector de la población que tenga diferentes características de clase social, raza, religión, secta o diferencia regional y que cree un peligro claro e inminente para la seguridad pública; o que denigren públicamente los valores religiosos de una parte de la población (art. 216, párrs. 1 y 3). Además, la ley sobre el establecimiento de empresas de radio y televisión y sus programas estipula, en el apartado d) del artículo 4, que los programas de ninguna manera humillarán o insultarán a las personas por motivos de idioma, raza, color, género, opinión política, creencias filosóficas, religión, secta o cualquier consideración de esa índole.

VI. CONCLUSIONES

80. La ex Alta Comisionada, en el primer período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, puso de relieve que la proliferación de actos y expresiones que contribuyan a la exacerbación de las tensiones culturales y religiosas produce nuevas tensiones dentro de las comunidades y entre ellas, y ha llegado recientemente a niveles sin precedentes de violencia y destrucción, sobre las cenizas de las cuales habrá que reconstruir ahora la confianza y la tolerancia. El uso de estereotipos dañinos y la perpetuación de mitos que demonizan, ridiculizan o insultan sentimientos religiosos muy arraigados y un sentido profundo de la identidad deben denunciarse tan vigorosamente como debe afirmarse y protegerse el derecho a promover ideas impopulares.

81. Hay preocupaciones legítimas respecto del aumento de manifestaciones de la intolerancia y la discriminación basadas en la religión o las creencias, así como de los actos de violencia, entre los que cabe mencionar ataques contra lugares de culto, que amenazan el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

82. Se necesita una mayor claridad en relación con los aspectos jurídicos de la línea de demarcación entre la libertad de expresión y la incitación al odio religioso. Para proteger a personas y grupos será preciso desarrollar una mejor comprensión de las limitaciones permisibles de la libertad de expresión de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. Por consiguiente, el ACNUDH organizará una consulta de expertos titulada "Vínculos entre los artículos 19 y 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: la libertad de expresión y la promoción de odios religiosos que constituyen una incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia". Esta consulta de expertos tendrá lugar los días 2 y 3 de octubre de 2008 en Ginebra y está abierta a la participación de observadores de los Estados Miembros, los organismos de las Naciones Unidas, las organizaciones regionales y las organizaciones no gubernamentales.
